

Un mejor empleo público para un mejor Estado

“...esta crisis de confianza en las instituciones y las expectativas de la ciudadanía por avanzar tanto en justicia de resultados como de trato nos obligan a mejorar la calidad del Estado, y en esto los funcionarios públicos son fundamentales...”.

IGNACIO BRIONES

Ministro de Hacienda

ALEJANDRO WEBER

Director del Servicio Civil

Hace algunos días dimos a conocer los resultados de la primera encuesta nacional a funcionarios públicos de Chile, realizada por el Servicio Civil en conjunto con la University College London y la Universidad de Chile. Por primera vez escuchamos en forma tan masiva y sin intermediarios la voz de los funcionarios públicos, con más de 21 mil respuestas de 65 instituciones.



Primero, veamos el vaso medio lleno. En materia de compromiso laboral, cerca del 80% de los funcionarios declaró sentirse orgulloso del trabajo que realiza y cree que tiene un impacto positivo en los demás, cifra superior a los datos comparables con países desarrollados como Australia o Estados Unidos. Esta es una buena noticia. Los funcionarios públicos son la cara visible del Estado y su contribución es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de los más necesitados y la clase media.

Sin embargo, en materia de mérito e integridad, hay camino importante por recorrer: un 36% de los funcionarios encuestados declara que la ayuda de familiares, amigos o políticos fue importante para obtener

su primer empleo en el Estado. Este dato es preocupante, pese a que un análisis más detallado muestra que las prácticas meritocráticas en el ingreso al empleo público han mejorado en el tiempo: este porcentaje desciende sostenidamente desde un 44% para quienes ingresaron hace veinte años, a un 25% para quienes lo hicieron durante los últimos cinco años. Esto es consistente con

la creación y las políticas implementadas por la Dirección Nacional del Servicio Civil y el Sistema de Alta Dirección Pública. Por otra parte, un 31% percibe que las conexiones políticas serán importantes para obtener un ascenso en el futuro. Nuevamente, esto castra el ideal meritocrático que debe imperar en la progresión de la carrera funcionaria. En materia de integridad, casi un tercio de los encuestados no es capaz de identificar con claridad un conflicto de interés cuando este emerge.

Adicionalmente, hemos conocido los resultados de un estudio publicado por el Consejo para la Transparencia, con cifras desalentadoras sobre la percepción del Estado que tienen los chilenos. Los resultados muestran que solo un 23% de los chilenos confía en el Estado, un 84% lo considera distante y, más preocupante aún, un 76% considera que recibe un mal trato del Estado y un 71% señala que este discrimina en la prestación de sus servicios. En síntesis, la sensación de abuso

es extensiva a los servicios del Estado. Esta realidad, y pese a los avances, plantea con nitidez que tenemos un gran desafío país por delante. Sabemos que la modernización del Estado es una tarea compleja, permanente y de largo aliento, pero llegó el momento de acelerar el tranco. Esta crisis de confianza en las instituciones y las expectativas de la ciudadanía por avanzar tanto en justicia de resultados como de trato nos obligan a mejorar la calidad del Estado, y en esto los funcionarios públicos son fundamentales.

En julio de 2019, el Presidente Piñera dio a conocer la Agenda de Modernización del Estado. Uno de sus pilares es la discusión sobre el futuro del empleo público. En tal sentido, los resultados de estos estudios nos permiten construir mejor evidencia para discutir, seriamente, nuevas reglas del juego para el empleo público, donde primen el mérito, la integridad y la igualdad de oportunidades durante todo el ciclo de vida laboral, teniendo siempre como norte al ciudadano. Necesitamos entre todos avanzar hacia un mejor Estado, más eficiente y ágil en su forma de adaptarse a las necesidades de los chilenos y chilenas.

En un Chile que pide cambios, nuestro Estado también debe cambiar. Por ello, el Gobierno ingresará un proyecto de ley para construir un nuevo empleo público, que contribuya a generar más confianza y combatir la crisis de legitimidad de las instituciones. El momento es histórico; la responsabilidad, ineludible.